



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general
3 de septiembre de 2012
Español
Original: inglés

Comité de Derechos Humanos

Comunicación N° 1827/2008

Decisión adoptada por el Comité en su 105ª sesión (9 a 27 de julio de 2012)

<i>Presentada por:</i>	S. V. (no representado por abogado)
<i>Presunta víctima:</i>	El autor, su esposa, T. G., y sus tres hijos
<i>Estado parte:</i>	Canadá
<i>Fecha de la comunicación:</i>	26 de septiembre de 2008 (presentación inicial)
<i>Referencias:</i>	Decisión del Relator Especial con arreglo al artículo 97 del reglamento, transmitida al Estado parte el 3 diciembre de 2008 y el 10 de marzo de 2009 (no se publicó como documento)
<i>Fecha de adopción de la decisión:</i>	23 de julio de 2012
<i>Asunto:</i>	Expulsión del Canadá a Rumania
<i>Cuestiones de procedimiento:</i>	Insuficiente fundamentación de las alegaciones; incompatibilidad con el Pacto
<i>Cuestiones de fondo:</i>	Derecho a la vida; prohibición de la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes; derecho a un recurso efectivo; derecho a la intimidad; libertad y seguridad personales; protección de la familia
<i>Artículos del Pacto:</i>	2, párr. 3; 6, párr. 1; 7; 9, párr. 1; 14; 17 y 23, párr. 1
<i>Artículos del Protocolo Facultativo:</i>	2; 3 y 5, párr. 2 b)

Anexo

Decisión del Comité de Derechos Humanos en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (105º período de sesiones)

respecto de la

Comunicación N° 1827/2008*

<i>Presentada por:</i>	S. V. (no representado por abogado)
<i>Presunta víctima:</i>	El autor, su esposa, T. G., y sus tres hijos
<i>Estado parte:</i>	Canadá
<i>Fecha de la comunicación:</i>	26 de septiembre de 2008 (presentación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 23 de julio de 2012,

Adopta la siguiente:

Decisión sobre la admisibilidad

1.1 El autor de la denuncia es el Sr. S. V., moldovo de nacimiento pero también ciudadano de Rumania desde 1995. Residió en el Canadá y pidió protección como refugiado antes de acabar siendo expulsado con su familia a Rumania el 25 de abril de 2009. Presenta la comunicación en su nombre, el de su esposa, T. G., y sus tres hijos. El autor alega que su regreso a Rumania constituiría una violación de sus derechos humanos, ya que tanto él como su familia podrían ser víctimas de tortura en la República de Moldova, adonde acabarían siendo expulsados desde Rumania. El autor no está representado por un abogado.

1.2 El autor pide al Comité que invite al Estado parte a no seguir adelante con la expulsión forzosa, que señaló que era inminente en el momento de presentación de la denuncia, a la espera de que se examinara el caso. El 3 de diciembre de 2008, el Comité se negó a adoptar medidas provisionales. El 6 de marzo de 2009, el autor presentó una nueva solicitud de medidas provisionales que volvió a ser rechazada por el Comité el 10 de marzo de 2009.

* Participaron en el examen de la presente comunicación los siguientes miembros del Comité: Sr. Yadh Ben Achour, Sr. Lazhari Bouzid, Sra. Christine Chanet, Sr. Ahmad Amin Fathalla, Sr. Cornelis Flinterman, Sr. Yuji Iwasawa, Sr. Walter Kälin, Sra. Zonke Zanele Majodina, Sra. Iulia Antoanella Motoc, Sr. Gerald L. Neuman, Sr. Michael O'Flaherty, Sr. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, Sr. Fabián Omar Salvioli, Sr. Marat Sarsembayev, Sr. Krister Thelin y Sra. Margo Waterval.

Los hechos expuestos por el autor

2.1 El autor es un científico que participó en actividades relacionadas con los derechos humanos y la lucha contra el comunismo en la antigua Unión Soviética. Afirma que, entre 1994 y 2001, fue detenido ilegalmente, torturado¹ y perseguido en varias ocasiones. En 2001, los servicios secretos de la República de Moldova confiscaron su casa y sus bienes y lo expulsaron con su familia a Rumania. De 2001 a 2005, residió en Portugal y España con visados temporales de estudiante. Llegó con su familia al Canadá el 8 de noviembre de 2005 con un visado para ejercer de profesor, de un año de duración. Solicitaron ser reconocidos como refugiados en 2006, cuando el partido comunista ganó las elecciones en la República de Moldova.

2.2 El 26 de abril de 2007, la solicitud de protección del autor fue rechazada por la División de Protección de los Refugiados de la Junta de Inmigración y Refugiados del Canadá. Las autoridades canadienses de inmigración consideraron que el testimonio del autor era creíble en cuanto a la persecución sufrida en la República de Moldova y la antigua Unión Soviética, pero que carecía de credibilidad en cuanto a su incapacidad para residir en Rumania y su expulsión a la República de Moldova. Concluyeron que ser expulsado a Rumania no supondría riesgo de tortura². El autor afirma que la decisión no tuvo en cuenta que, si los expulsaban a Rumania, tanto él como su familia acabarían siendo expulsados a la República de Moldova, ya que la práctica habitual en Rumania era enviar a las personas al país correspondiente a su primera nacionalidad.

2.3 El autor solicitó una orden de aplazamiento de la expulsión, que fue concedida el 19 de marzo de 2008, y presentó una solicitud de revisión judicial, concedida el 27 de junio de 2008, alegando que las autoridades canadienses de inmigración no habían tenido en cuenta las nuevas pruebas que había presentado (por ejemplo, las leyes rumanas sobre extradición). El autor afirmó que el funcionario encargado de la evaluación previa del riesgo de regreso que había rechazado su solicitud no había evaluado adecuadamente las nuevas pruebas presentadas en cuanto al peligro que correría en la República de Moldova si tuviera que volver a Rumania. El Tribunal Federal, en una decisión de fecha 18 de septiembre de 2008, desestimó la solicitud del autor y consideró que en el proceso de la evaluación previa del riesgo de regreso no se había errado al determinar la inadmisibilidad de las pruebas relativas a las leyes rumanas de extradición, ya que el autor no justificaba el motivo por el cual estas no se habían presentado en condiciones normales a la Junta de Inmigración y Refugiados del Canadá.

La denuncia

3.1 En su extensa comunicación al Comité, el autor presenta varias denuncias, pero no invoca artículos del Pacto, si bien invoca la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El autor alega en términos generales que existe corrupción entre las autoridades de inmigración en el Canadá y que, al parecer, fue víctima de discriminación a la hora de recibir asistencia letrada para su caso de inmigración.

3.2 En primer lugar, el autor sostiene que será víctima de tortura si es expulsado a Rumania, ya que, a continuación, este país lo expulsaría a la República de Moldova, su país de primera nacionalidad, conforme a las leyes rumanas de extradición. Cabe señalar que el 25 de abril de 2009 el autor y su familia fueron expulsados a Rumania.

¹ Se adjuntan a la denuncia certificados médicos de 1999.

² Evaluación previa del riesgo de retorno de 11 de enero de 2008, secc. 4, párrs. 2 y 3.

3.3 En segundo lugar, el autor alega que en junio de 2008 el Canadá se negó a concederle, junto a T. G., un permiso de trabajo, incluso cuando el Tribunal Federal había ordenado el 18 de marzo de 2008 que se aplazara su expulsión del país. Por ello, el autor indica que su familia, compuesta por cinco personas, tuvo que subsistir con un subsidio de menos de 100 dólares al mes tras pagar el alquiler. Alega que esas condiciones equivalen a pasar hambre y suponen actos de tortura por parte del Canadá. Indica además que las restricciones en el acceso a las oportunidades laborales por motivos de inmigración, educación y país de origen son discriminatorias.

3.4 En tercer lugar, el autor alega además que sus datos personales, como su domicilio y números de teléfono, habían sido remitidos sin su consentimiento a los sitios web de la Sociedad Canadiense de Asesores de Inmigración y de una empresa llamada "Rogers". Además, sostiene que la Universidad de Toronto se puso en contacto con la Embajada de la República de Moldova en esa ciudad y le envió sus datos personales. Afirma que se trata de una conculcación de su derecho a la libertad y a la seguridad personales.

3.5 En cuarto lugar, el autor afirma que se ha conculcado su derecho a un recurso efectivo. Señala que, dado que ni T. G. ni él tenían permisos de trabajo, no tuvieron acceso a la justicia, ya que no podían pagar las costas judiciales. Por ello, según el autor, se les impidió ilegalmente el acceso a los tribunales.

3.6 En quinto lugar, el autor afirma que se ha conculcado el derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías al tratar cuestiones de inmigración. Alega que la Junta de Inmigración y Refugiados del Canadá no actuó de manera imparcial y falsificó sus datos del pasaporte y otros documentos, comprometiendo así las posibilidades de éxito en apelación de cualquiera de sus solicitudes. Dice además que, tras las decisiones adoptadas por la Junta de Inmigración y Refugiados y el Tribunal Federal, su solicitud del estatuto de refugiado fue rechazada a causa de procesos injustos que suponen una violación de los principios de la justicia natural. Al respecto, sostiene que durante la audiencia relativa a la solicitud ante la Junta de Inmigración y Refugiados, a él y a T. G. no se les permitió presentar explicaciones ni pruebas al respecto, en concreto sobre la Ley N° 302/2004 de Rumania de extradición de ciudadanos con doble nacionalidad a su país de domicilio. El autor aduce además que no contaron con la representación profesional de abogados de oficio durante la audiencia celebrada por la Junta de Inmigración y Refugiados y durante la tramitación de la solicitud de admisión de la revisión judicial, ya que los abogados en cuestión eran incompetentes y tergiversaron hechos materiales. El autor aduce, además, que los abogados de oficio falsificaron sus documentos y "limpiaron" sus declaraciones juradas. El autor alega que los jueces del Tribunal Federal no le permitieron presentar explicaciones en relación con el efecto de la Ley N° 302/2004 de Rumania. El autor sostiene, además, que, durante la tramitación de las solicitudes de evaluación previa del riesgo de regreso y de consideración de protección por razones humanitarias y de compasión, Stela Coldea, miembro de la Sociedad Canadiense de Asesores de Inmigración que estaba asignada a ayudarles con las solicitudes, falsificó la solicitud de protección por razones humanitarias y de compasión y no presentó los formularios y documentos necesarios. El autor alega que cuando no prosperó la solicitud de evaluación previa del riesgo de regreso, la Sra. Coldea les mintió e intentó conseguir 10.000 dólares mediante extorsión para apelar ante el Tribunal Federal cuando, en realidad, no podía comparecer ante él.

3.7 Por último, el autor sostiene que las autoridades canadienses se negaron a facilitar asistencia médica a T. G. cuando estaba embarazada de seis meses. El autor alega que fue víctima de discriminación por su condición de inmigrante y porque no estaba cubierta por el Programa federal provisional de salud. El autor sostiene que habían solicitado una ampliación de cobertura del Programa que había sido rechazada, a pesar de que el médico que la atendía había confirmado que estaba embarazada y necesitaba asistencia médica urgente. El autor alega además que se le negó la asistencia médica que necesitaba pese a

padecer de hipertensión y de problemas cardíacos y necesitar atención médica relacionada con pruebas del cáncer. En último lugar, sobre este tema, el autor sostiene que les fue negada asistencia médica a sus hijos menores de edad en invierno cuando tuvieron gripe y resfriados.

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

4.1 El 3 de junio de 2009, el Estado parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de la denuncia. El Estado parte sostiene que la solicitud de protección como refugiado presentada por el autor fue examinada por la Junta de Inmigración y Refugiados del Canadá, que emitió su decisión el 26 de abril de 2007, en la que concluía que el autor y su familia no eran refugiados amparados por la Convención y, por lo tanto, no necesitaban protección. El Estado parte afirma que la Junta de Inmigración y Refugiados consideraba que el hecho de que el autor hubiera vivido y trabajado en España, Portugal y los Estados Unidos de América de 2001 a 2005 sin presentar en ninguno de esos países una solicitud de refugiado era una clara indicación de la ausencia de temor. El Estado parte sostiene, además, que el autor admitió en una declaración oral jurada que no había solicitado protección como refugiado en Portugal porque podía obtener un sueldo mayor en el Canadá. Por esta razón, la Junta de Inmigración y Refugiados determinó que el autor buscaba el país más ventajoso.

4.2 El Estado parte señala además que, el 16 de agosto de 2007, la solicitud de admisión a trámite de revisión judicial de la decisión de la Junta de Inmigración y Refugiados fue rechazada por el Tribunal Federal. A finales de octubre de 2007, el autor presentó una solicitud de evaluación previa del riesgo de regreso que fue rechazada el 11 de enero de 2008. A continuación, el autor presentó una petición de admisión a trámite de una apelación ante el Tribunal Federal para que se examinara la decisión negativa relativa a dicha evaluación, que fue aceptada el 18 de marzo de 2008. Esta orden aplazó efectivamente la expulsión de la familia del Canadá hasta que se presentara la decisión final de la revisión judicial.

4.3 El Estado parte sostiene que el 18 de septiembre de 2008 el Tribunal Federal descartó la solicitud de revisión judicial porque las nuevas pruebas que, según el autor, no habían sido examinadas debidamente por el funcionario encargado de la evaluación previa del riesgo de regreso, a saber, el artículo 24 de la Ley N° 302/2004 de Rumania, no eran nuevas, ya que podrían haberse presentado en condiciones normales a la Junta de Inmigración y Refugiados del Canadá. Por lo tanto, el Tribunal Federal consideró que dicho funcionario no había cometido ningún error susceptible de revisión al no admitir ese documento como prueba. El 12 de marzo de 2008, el autor pidió a la Junta de Inmigración y Refugiados que reabriera el caso de su solicitud de protección como refugiado arguyendo que la audiencia ante la Junta había supuesto una violación de la justicia. El 17 de abril de 2008, la Junta de Inmigración y Refugiados desestimó la solicitud al considerar que el autor no había establecido una violación de la justicia natural. Después, el autor solicitó la admisión a trámite de una apelación ante el Tribunal Federal para examinar la decisión de la Junta de no reabrir su solicitud de refugiado. El 15 de agosto de 2008, el Tribunal Federal rechazó la admisión.

4.4 En enero de 2008, el autor presentó una solicitud de residencia permanente por razones humanitarias y de compasión. En ella defendió que, según la Ley N° 302/2004 de Rumania sobre extradición, si era enviado a Rumania con su familia, serían extraditados automáticamente a la República de Moldova porque la nacionalidad rumana de la familia no era efectiva si no establecían su domicilio en ese país. El 9 de enero de 2009 la solicitud por razones humanitarias y de compasión fue rechazada. El 20 de abril de 2009 el autor presentó una solicitud de admisión a trámite de revisión judicial ante el Tribunal Federal. La expulsión del Canadá del autor y su familia estaba prevista para el 22 de abril de 2009, y

su solicitud de aplazamiento fue rechazada el 20 de abril de 2009 porque el autor no se presentó a la audiencia. El autor y su familia fueron expulsados a Rumania el 25 de abril de 2009.

4.5 En cuanto al hecho de que presuntamente habían pasado hambre y carecido de apoyo financiero suficiente, el Estado parte señala que el autor no presentó pruebas de que se le hubiera negado la asistencia financiera, sino que simplemente no estaba satisfecho con la cantidad que recibían él y su familia, ni con el requisito de demostrar periódicamente que seguían teniendo derecho a recibirla.

4.6 Con respecto a la afirmación del autor de que se había denegado la cobertura médica y la ampliación de cobertura del Programa federal provisional de salud, el Estado parte sostiene que este Programa ofrece cobertura básica de salud a las personas que cumplen los requisitos para ello y que pueden demostrar que tienen necesidades económicas. El Estado parte señala que las personas que solicitan el estatuto de refugiado y que tienen necesidades económicas se benefician de una cobertura básica y complementaria del Programa mientras se determina si se les concede o no ese estatuto, y mientras esperan una decisión tras solicitar una evaluación previa del riesgo de regreso. El Estado parte sostiene que el autor no presentó pruebas de que se hubiera denegado cobertura médica a su familia. El Estado parte no tiene constancia de haber rechazado la solicitud de la familia relativa al Programa. Al contrario, el Estado parte sostiene que sus registros indican que la cobertura fue renovada el 5 de enero de 2009 y que era válida hasta el 4 de enero de 2010.

4.7 En lo que respecta a la afirmación del autor de que tanto él como su esposa pagaron las tasas correspondientes para ampliar sus permisos de trabajo en enero de 2008 pero que sus solicitudes fueron rechazadas por encontrarse en aquel momento bajo orden de expulsión, el Estado parte afirma que, conforme al artículo 299 del Reglamento sobre inmigración y protección de refugiados, el solicitante de protección como refugiado está exento del pago de las tasas que se aplican normalmente a dicha solicitud. El Estado parte sostiene que, el 21 de enero de 2008, cuando el autor y su esposa solicitaron sus permisos de trabajo, ya se les había denegado la condición de refugiados y se habían agotado todos los recursos. Por lo tanto, el autor y su familia pasaron a ser objeto de una orden ejecutiva de expulsión, y ni él ni su esposa podían solicitar un permiso de trabajo conforme a los artículos 206 y 209 del Reglamento sobre inmigración y protección de refugiados. El Estado parte sostiene, por consiguiente, que su solicitud relativa a los permisos de trabajo había sido rechazada de conformidad con la ley. El Estado parte sostiene, además, que, en junio de 2008, cuando los autores estaban bajo aplazamiento judicial temporal de expulsión y realizaron una nueva solicitud, esta no podía ser procesada sin pagar las tasas.

4.8 En cuanto a la reclamación relativa a la denegación de asistencia jurídica gratuita y de acceso a la justicia, el Estado parte señala que, en el país, la asistencia jurídica gratuita para las personas con necesidades económicas se facilita, en la provincia de Ontario, a través del Plan de asistencia jurídica de Ontario, que incluye las audiencias relativas a refugiados. Sin embargo, en caso de que la cobertura para asistencia jurídica que proporciona el Plan no esté disponible en un procedimiento jurídico concreto, el Estado parte señala que hay centros de asistencia jurídica, tanto a nivel profesional como estudiantil, que pueden ofrecer asistencia. El Estado parte sostiene que el 6 de abril de 2009 el autor presentó al Tribunal Federal una solicitud de admisión a trámite de revisión judicial de la negativa del Primer Ministro del Canadá, el Ministro de Ciudadanía e Inmigración, el Ministro de Seguridad Pública, el Ministro de Salud y el Ministro de Justicia y el Fiscal General a dar respuestas y soluciones a sus distintas denuncias, pero que no pagó las costas judiciales correspondientes a su solicitud.

4.9 En cuanto a la admisibilidad, el Estado parte sostiene que la comunicación debería considerarse inadmisible *ratione materiae*, ya que el autor no alega violaciones del Pacto, sino de instrumentos sobre los cuales el Comité carece de competencia de supervisión, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura. A título subsidiario, teniendo en cuenta que algunas de las afirmaciones parecen plantear cuestiones relativas al Pacto, el Estado parte sostiene que esas afirmaciones no se han fundamentado suficientemente a los efectos de la admisibilidad. Por otra parte, el Estado parte sostiene que las afirmaciones no han alcanzado el grado de prueba necesario para determinar que se ha conculcado el Pacto.

4.10 En cuanto a las afirmaciones que parecen suscitar cuestiones en relación con el Pacto, el Estado parte presenta una respuesta detallada a cada una de ellas. El Estado parte considera que el presunto peligro de muerte, tortura o tratos o penas inhumanos en la República de Moldova suscita cuestiones en relación con los artículos 6 y 7. Sin embargo, el Estado parte sostiene que las afirmaciones del autor según las cuales, de ser expulsado a Rumania, su familia y él serían posteriormente expulsados a la República de Moldova, donde corren el peligro de muerte, tortura o tratos o penas inhumanos, no se han fundamentado suficientemente. Por consiguiente, estos aspectos de la comunicación deberían ser declarados inadmisibles de conformidad con el artículo 2 del Protocolo Facultativo³. Al respecto, el Estado parte subraya que, si bien los autores de una comunicación no necesitan probar su caso, "debe[n] presentar pruebas suficientes en apoyo de sus alegaciones para que constituya un caso *prima facie*"⁴.

4.11 El Estado parte sostiene, además, que, ya que las alegaciones relativas a los peligros en Rumania se basan esencialmente en los mismos hechos y pruebas presentados en los procedimientos de la Junta de Inmigración y Refugiados, la evaluación previa del riesgo de regreso y la solicitud por razones humanitarias y de compasión, no compete al Comité reevaluar los hechos y las pruebas, a no ser que sea evidente que la evaluación del tribunal nacional hubiera sido arbitraria o equivalente a una denegación de justicia⁵. A título subsidiario, el Estado parte aduce que, en caso de que el Comité desee reexaminar las conclusiones de hecho y la credibilidad de los tribunales nacionales, conviene recordar que la Junta de Inmigración y Refugiados determinó que el temor del autor y su familia a regresar a Rumania no era creíble, primero, porque no habían presentado solicitudes como refugiados en España, Portugal y los Estados Unidos de América, donde habían vivido entre 2001 y 2005. En segundo lugar, porque el autor y su familia buscaban el país más ventajoso, teniendo en cuenta que en una declaración oral jurada el autor admitió que no había solicitado protección como refugiado en Portugal porque su sueldo en ese país no sería igual que en el Canadá. Tercero, el autor carecía de credibilidad al afirmar que no había podido obtener la residencia en 2001 ya que, de hecho, había pruebas que

³ En este contexto, el Estado parte hace referencia a las comunicaciones del Comité N° 970/2001 (2003), *Fabrikant c. el Canadá*, decisión sobre la admisibilidad adoptada el 6 de noviembre de 2003, párr. 9.3; N° 1234/2003 (2007), *P. K. c. el Canadá*, decisión sobre la admisibilidad, párr. 7.3; N° 1562/2007 (2008), *Kibale c. el Canadá*, decisión sobre la admisibilidad adoptada el 22 de julio de 2008, párr. 6.4; N° 1534/2006 (2008), *Pham c. el Canadá*, decisión sobre la admisibilidad adoptada el 22 de julio de 2008, párr. 7.4; N° 1481/2006 (2008), *Tadman y Prentice c. el Canadá*, decisión sobre la admisibilidad adoptada el 22 de julio de 2008, párr. 7.3; N° 1455/2006 (2008), *Kaur c. el Canadá*, decisión sobre la admisibilidad adoptada el 30 de octubre de 2008, párr. 7.3; N° 1638/2007 (2008), *Wilfred c. el Canadá*, decisión sobre la admisibilidad adoptada el 30 de octubre de 2008, párr. 4.3; N° 1766/2008 (2008), *Anani c. el Canadá*, decisión sobre la admisibilidad adoptada el 30 de octubre de 2008, párr. 4.2.

⁴ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo noveno período de sesiones, Suplemento N° 40 (A/39/40)*, párr. 588.

⁵ Véanse las comunicaciones N° 1234/2003, párr. 7.3; N° 1481/2006, párr. 7.3; N° 1534/2006, párr. 7.4; N° 1562/2007, párr. 6.4.

demostraban que no había obtenido la residencia en Rumania en 2001 porque había abandonado el país para dar clases en Europa occidental. Por último, contemplando el escenario más probable, el autor y su familia gozarían de los derechos de todos los ciudadanos de Rumania y no serían expulsados a la República de Moldova tras tres meses de residencia⁶. El Estado parte sostiene que la Junta de Inmigración y Refugiados basó su conclusión en las pruebas documentales que tenía ante sí, como la Constitución rumana y otros informes en que se estipulaba, entre otras cosas, la igualdad de los ciudadanos; el derecho de los ciudadanos a regresar a Rumania; y la imposibilidad de expulsarlos.

4.12 En lo que respecta a la Ley N° 302/2004 de Rumania, el Estado parte sostiene que en ella no se contempla la expulsión de ciudadanos fuera del contexto de la extradición. Por lo tanto, a falta de pruebas que demuestren que el autor será perseguido en la República de Moldova por cargos penales que puedan ponerlo en peligro de que se solicite su extradición, el Estado parte sostiene que el autor no ha demostrado que ni su familia ni él podrían, a su regreso a Rumania, correr peligro directo o indirecto de trato alguno que contravenga los artículos 6 o 7 del Pacto. El Estado parte recuerda que el Comité ha sostenido que, en los casos de extradición o expulsión, el Estado que expulsa es responsable de garantizar que, en el Estado receptor, la persona no se vea expuesta a un peligro real de violación de sus derechos conforme al artículo 6⁷. Recuerda que el riesgo real de violación de los derechos de la persona significa que tiene que ser consecuencia necesaria y previsible del regreso forzado, conclusión que no queda demostrada en el material presentado. El Estado parte sostiene, además, que ese material no demuestra, ni siquiera *prima facie*, que la "consecuencia necesaria y previsible de la deportación"⁸ sería su expulsión de Rumania a la República de Moldova, donde serían perseguidos. En cuanto a las alegaciones realizadas conforme al artículo 7, el Estado parte recuerda que "los Estados Partes no deben exponer a las personas al peligro de ser sometidas a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes al regresar a otro país tras la extradición, la expulsión o la devolución"⁹. El Estado parte sostiene que las alegaciones del autor no demuestran que exista un riesgo que no sea meramente "teórico o basado en la sospecha" y tampoco un riesgo real y personal de ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por lo tanto, el Estado parte sostiene que las reclamaciones presentadas al respecto son inadmisibles con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo por falta de fundamentación.

⁶ Véanse los comentarios del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo, de fecha 3 de junio de 2009, pág. 16.

⁷ Véanse las comunicaciones N° 539/1993, *Cox. c. el Canadá*, decisión sobre la admisibilidad adoptada el 3 de noviembre de 1993, párrs. 10.1 a 10.5; N° 470/1991, *Kindler c. el Canadá*, dictamen aprobado el 30 de julio de 1993, párr. 14.3; N° 469/1991, *Ng c. el Canadá*, dictamen aprobado el 5 de noviembre de 1993, comunicación, párrs. 14.1 y 14.2; N° 829/1998, *Judge c. el Canadá*, dictamen aprobado el 5 de agosto de 2002, párr. 10.2.

⁸ Véanse las comunicaciones N° 692/1996, *A. R. J. c. Australia*, dictamen aprobado el 28 de julio de 1997, comunicación, párrs. 6.11 a 6.13; N° 706/1996, *G. T. c. Australia*, dictamen aprobado el 4 de noviembre de 1997, párrs. 8.1 y 8.2.

⁹ Observación general N° 20 (1992) sobre la prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, *Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo séptimo período de sesiones, Suplemento N° 40 (A/47/40)*, anexo VI, secc. A, párr. 9. Más recientemente, véase la Observación general N° 31 (2004) sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, *Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo noveno período de sesiones, Suplemento N° 40, vol. I (A/59/40 (Vol. I))*, anexo III, párr. 12.

4.13 Con respecto a la supuesta denegación de asistencia jurídica gratuita para ayudar al autor durante los procesos de inmigración y las actuaciones judiciales, así como otras denuncias presentadas a las autoridades del Estado, el Estado parte señala que, durante la audiencia de la Junta de Inmigración y Refugiados, el autor fue representado por un abogado-procurador y, por lo tanto, no puede denunciar la falta de representación jurídica en la audiencia de determinación de la condición de refugiado. El Estado parte recuerda, además, que el autor alega que los abogados consultados le pidieron más dinero (aspecto que define como "extorsión") ya que era necesario más tiempo para revisar el gran volumen de documentos que quería presentar como pruebas. El Estado parte sostiene que, conforme al Pacto, no hay requisito alguno por el cual el Estado deba prestar asistencia jurídica gratuita a los litigantes que deseen llevar a cabo innumerables denuncias y procedimientos. El Estado parte recuerda el dictamen del Comité en *J. O. y otros c. Bélgica*¹⁰, en que el Comité señaló que en el artículo 14 del Pacto se obligaba a los Estados partes a proporcionar asistencia letrada únicamente en el marco de actuaciones penales. Por lo tanto, se concluyó que las denuncias del autor en ese caso, relativas a la competencia de sus abogados en las distintas actuaciones civiles y su incapacidad para pagar una representación jurídica de manera continuada eran incompatibles *ratione materiae* con las disposiciones del Pacto, en virtud del artículo 3 del Protocolo Facultativo.

4.14. En lo que respecta a las alegaciones relativas a la insuficiencia de la asistencia financiera proporcionada, al carácter inadecuado de la asistencia sanitaria gratuita y a la denegación de los permisos de trabajo, el Estado parte sostiene que son derechos fundamentalmente económicos y, como tales, son inadmisibles *ratione materiae* en virtud del artículo 3 del Protocolo Facultativo. A título subsidiario, el Estado parte sostiene que esos aspectos de la comunicación son inadmisibles por falta de fundamentación conforme al artículo 2 del Protocolo Facultativo. Al respecto, el Estado parte se basa en el dictamen del Comité sobre *Wilfred c. el Canadá*¹¹, en que la comunicación del autor basada en "denuncias de índole general", sin presentar información para fundamentar las presuntas violaciones, fue considerada inadmisible en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

4.15 El Estado parte sostiene que, a partir de las consideraciones presentadas, la comunicación debería declararse inadmisible en su conjunto por incompatibilidad con las disposiciones del Pacto conforme al artículo 3 del Protocolo Facultativo o, subsidiariamente, por falta de fundamentación conforme al artículo 2 del Protocolo Facultativo. El Estado parte sostiene que si la comunicación se declara inadmisible, el Comité debería, sobre la base de las comunicaciones del Estado parte, determinar al respecto que carece totalmente de fundamento.

Comentarios del autor

5.1 El 14 de septiembre de 2009 el autor presentó sus comentarios y reiteró sus reclamaciones. Añade, sin embargo, una reclamación en relación con el artículo 7 del Pacto.

5.2 El autor alega que el 25 de abril de 2009, durante la expulsión de su familia a Rumania, agentes de la Agencia de Servicios Fronterizos del Canadá (ASFC) lo sometieron, junto a su familia, a tortura y malos tratos, y confiscaron y destruyeron sus documentos y la máquina de fax que utilizaba para enviar documentos al Comité. El autor alega además que el 24 de abril de 2009, tres personas vestidas de civil, que decían ser funcionarios de la Oficina Canadiense de Inmigración, agredieron al autor e intentaron cometer abusos sexuales contra su hija de 10 años. El autor alega que vecinos y amigos tuvieron que intervenir para que los funcionarios detuviesen sus "actos criminales".

¹⁰ Comunicación N° 1417/2005, decisión sobre la admisibilidad adoptada el 28 de octubre de 2005, párr. 4.4.

¹¹ Comunicación N° 1638/2007 párr. 4.3.

5.3 El autor alega, además, que, durante la ejecución de la orden de expulsión, funcionarios del Estado parte ordenaron a un obstetra en Toronto, que atendía a T. G. durante su embarazo, que no emitiera certificados médicos. El autor alega que el médico insistió en que se le pagaran 35 dólares por cualquier tipo de certificado médico. El autor alega, además, que el 22 de abril de 2009, T. G., entonces embarazada de siete meses, tuvo que mover más de 250 kg de equipaje cuando el autor fue detenido por agentes de la ASFC. El autor alega, además, que la familia fue retenida en un hotel especial y que no recibieron alimentos hasta las 2.00 de la mañana después de "20 horas de tortura".

5.4 El autor alega también que el 23 de abril de 2009 fue interrogado en el centro de control del aeropuerto de Toronto. Se quejó y solicitó la presencia de un abogado, así como que le devolvieran todos los bienes confiscados, a lo que recibió una respuesta negativa. El autor alega que él y su familia fueron detenidos y trasladados al hotel Econolodge y que, una vez allí, llegó un agente del orden que tomó fotos humillantes de su esposa y de él, y los amenazó con matarlos si se quejaban ante los funcionarios.

5.5 El autor indica que, al llegar a Rumania el 27 de abril de 2009, la policía de aduanas rumana les comunicó que tendrían que abandonar el país con destino a la República de Moldova transcurridos tres meses si no obtenían la residencia permanente en Rumania. El autor alega que sus hijos no fueron aceptados en la escuela y que carecen de asistencia social y médica. El autor alega, además, que la familia se ve obligada a evitar ser detenida y expulsada, ya que corren el peligro de ser devueltos a la República de Moldova.

5.6 En respuesta a las cuestiones específicas planteadas por el Estado parte, el autor refuta haber afirmado que estuviera buscando el país más ventajoso y haber declarado que no había solicitado el estatuto de refugiado en Portugal porque recibiría un sueldo más alto en el Canadá.

5.7 En lo que respecta al argumento del Estado parte a los efectos de declarar la comunicación inadmisibile *ratione materiae* porque el Comité carece de competencias en cuanto a presuntas violaciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Convención contra la Tortura, el autor sostiene que es absurdo decir que el Comité carece de competencia en cuanto a presuntas violaciones de esos instrumentos. Al respecto, el autor cita el preámbulo del Pacto, que hace referencia al reconocimiento de que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, el ser humano disfruta de las libertades civiles y políticas y goza de sus derechos económicos, sociales y culturales.

5.8 En respuesta al argumento del Estado parte de que las alegaciones de denegación de permisos de trabajo y de cobertura sanitaria, de haber pasado hambre y de no haber recibido suficiente apoyo financiero son reivindicaciones estrictamente económicas y, por lo tanto, están fuera del ámbito del Pacto, el autor aduce que no lo son. El autor sostiene que la denegación ilícita de permisos de trabajo y asistencia médica, el hecho de pasar hambre y la denegación de cuidados prenatales deben considerarse a la luz de la prohibición de la tortura y la discriminación por su condición de inmigrantes. Por lo tanto, el autor sostiene que el Comité tiene competencia para ocuparse de esas alegaciones a la luz de las disposiciones correspondientes del Pacto.

Observaciones adicionales del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

6.1 El 2 de noviembre de 2010, el Estado parte presentó sus observaciones adicionales sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación.

6.2 En lo que respecta a las alegaciones de detención ilegal antes y durante el proceso de expulsión y el sometimiento a tortura, agresiones y actos de violencia sexual, el Estado parte presenta un resumen de las declaraciones de los agentes de la ASFC encargados de la

expulsión del autor y su familia¹². En esas declaraciones, los agentes niegan haber cometido actos de maltrato o de agresión. El Estado parte sostiene además que el 21 de abril de 2009 los agentes Andrea Duncan y John Hawley acudieron al apartamento de la familia y hablaron con el autor, quien afirmó que había acordado que un amigo los conduciría al aeropuerto al día siguiente con su familia. Cuando T. G. llegó a la vivienda, confirmó los planes de viaje de la familia. Además, el Estado parte señala que un funcionario de la escuela de los niños que se había desplazado al apartamento con T. G. había confirmado que los niños dejarían de ir a la escuela. El Estado parte sostiene que, a la vista de esta información, los agentes determinaron que la familia se presentaría en el aeropuerto para ser expulsada, y que no era necesaria su detención. El Estado parte, por lo tanto, niega que se hubiera detenido y agredido al autor y su familia y que se hubieran confiscado sus pertenencias.

6.3 En cuanto a las alegaciones según las cuales el 22 de abril de 2009 T. G., entonces embarazada de siete meses, había tenido que mover más de 250 kg de equipaje y la familia había sido retenida en un hotel y sometida a la tortura de pasar hambre después de impedírsele subir al avión, el Estado parte sostiene que la familia perdió el avión por llevar exceso de equipaje. Por lo tanto, fueron trasladados al hotel Econolodge. El Estado parte sostiene que, si bien cuando llegaron al hotel la cocina estaba cerrada, la dirección del hotel convino en abrirla y llevarles comida a la habitación sobre las 22.30 horas y no a las 2.00 horas como dice el autor. El Estado parte señala que los agentes apenas hablaron o se relacionaron con la familia, se limitaron a intercambiar cortesías y se comportaron como profesionales durante el proceso.

6.4 El Estado parte niega las alegaciones de que el 23 de abril de 2009 el autor fuera interrogado en el aeropuerto de Toronto a las 10.00 horas y que, pese a presentar una queja ante el agente David Sullivan del centro de control y de solicitar la presencia de un abogado, no se hiciera nada para ayudarles. El Estado parte sostiene que el autor pidió al agente David Sullivan que ultimase lo necesario para llevar a cabo la expulsión de la familia el 25 de abril de 2009, la nueva fecha programada. El agente determinó que el autor y su familia seguían teniendo acceso a su apartamento y que podían permanecer allí hasta el día de la expulsión. Por lo tanto, se pidió a dos agentes, Carlson y Stager, que llevaran el equipaje del autor que la familia no podía trasladar al apartamento (nueve bultos en total) a un almacén de depósito en el aeropuerto hasta que tuviera lugar la expulsión. El Estado parte niega las alegaciones del autor de que había sido detenido y se le había negado acceso a un abogado y de que, ese mismo día, se habían confiscado los documentos y libros de la familia.

6.5 El Estado parte niega asimismo las alegaciones en el sentido de que, la noche del 23 al 24 de abril de 2009, tres personas vestidas de civil, que decían ser funcionarios de la Oficina de Inmigración del Canadá, agredieron al autor e intentaron cometer "abusos sexuales" contra su hija de 10 años hasta que fueron rescatados gracias a la intervención de vecinos y amigos. El Estado parte sostiene que esas alegaciones son difamatorias e incendiarias, ya que el autor no aportó pruebas de los vecinos y amigos. El Estado parte sostiene que no tiene constancia de que ninguno de sus funcionarios estuviera en contacto con la familia ese día en concreto. El Estado parte aduce que, teniendo en cuenta que la expulsión del autor se había cambiado al 25 de abril de 2009, no había motivos para que los agentes visitaran a la familia esos días.

6.6 En lo que respecta a la situación del autor en Rumania, el Estado parte sostiene que el hecho de que el autor y su familia hayan vivido en Rumania durante un año después de su llegada en abril de 2009 es una prueba clara de que no serán expulsados en el futuro. Además, el Estado parte señala que Rumania entró a formar parte de la Unión Europea en

¹² Véanse las declaraciones adjuntas a la comunicación suplementaria del Estado parte al Comité de fecha 1º de noviembre de 2010.

enero de 2007 y que, por lo tanto, sus ciudadanos, incluidos el autor y su familia, pueden viajar sin restricciones a otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, el Estado parte aduce que si el autor y su familia no están contentos con su vida en Rumania pueden trasladarse libremente a otro país de la Unión Europea y buscar trabajo allí. El Estado parte sostiene por este motivo que las nuevas reclamaciones relativas a la forma en que fueron expulsados y a su situación en Rumania deberían ser declaradas inadmisibles por falta de fundamentación con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo. A título subsidiario, el Estado parte solicita que se declare que las alegaciones del autor carecen totalmente de fundamento.

Comentarios del autor sobre las observaciones adicionales del Estado parte

7.1 El 14 de diciembre de 2010, el autor presentó sus comentarios al respecto de las observaciones adicionales del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo. En esos comentarios, el autor repite en gran medida los comentarios recogidos anteriormente. Sin embargo, el autor presenta una serie de cuestiones que no habían sido mencionadas.

7.2 En lo que respecta a su situación en Rumania, el autor reitera que T. G. tiene doble nacionalidad, rumana y ucraniana. Alega que Ucrania no reconoce la doble nacionalidad y, por lo tanto, esto repercute de manera significativa en ella y en la situación de sus hijos. El autor sostiene que ucranianos y moldovos reciben un trato diferente en Rumania. El autor afirma además que carecen de reconocimiento jurídico en Rumania y que, al no tener fuentes de ingresos, viven gracias al apoyo de ciertas personas, algunas de origen rumano. El autor alega que ni su esposa ni él pueden obtener un permiso de trabajo. Sostiene, además, que, según su experiencia como becario universitario en varios países de la Unión Europea, para poder cursar una solicitud es necesario presentar, entre otras cosas, certificados de antecedentes penales de todos los países de nacionalidad y de aquellos en que hayan vivido durante más de seis meses. El autor sostiene que, como ni Ucrania ni la República de Moldova facilitaron esa documentación a su familia cuando la pidieron en 2005, no cumplen los requisitos necesarios para pedir trabajo.

7.3 Con respecto a las declaraciones anexas a las observaciones adicionales del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo, el autor aduce que, en esa comunicación, el Estado parte incurrió en falsedades adicionales para proteger los abusos y las acciones criminales de los funcionarios canadienses.

7.4 En lo referente a los comentarios del Estado parte, según los cuales el 21 de abril de 2009 agentes de la ASFC acudieron al apartamento del autor, donde este afirmó que había acordado que un amigo los conduciría al aeropuerto, el autor alega que no permitió que entraran en el apartamento. Alega que, sin embargo, los agentes forzaron la puerta y lo detuvieron antes de realizar un registro no autorizado. Un agente de policía y un miembro de la Sociedad Canadiense de Asesores de Inmigración intentaron conseguir dinero mediante extorsión y organizaron su detención ilegal, tortura e intento(s) de violar a su hija. El autor afirma además que las tres personas vestidas de civil que llegaron a su apartamento el 24 de abril de 2009 insinuaron que actuaban en connivencia con el agente de policía y el miembro de la Sociedad Canadiense de Asesores de Inmigración.

7.5 El autor alega, además, que los funcionarios del Estado parte no solo tomaron fotos humillantes de sus hijos, sino que también las publicaron en Internet.

7.6 En lo que respecta a la respuesta del Estado parte según la cual ningún funcionario estuvo en contacto con la familia el 24 de abril de 2009 y las denuncias de agresión y la intervención de vecinos y amigos para detenerla carecen de fundamento, el autor sostiene que pueden solicitarse declaraciones en calidad de testigos a los vecinos, que podrán confirmar esas alegaciones. El autor añade que también pueden solicitarse declaraciones al director y los maestros de la escuela a que acudían sus hijas.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

8.1 Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si dicha comunicación es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

8.2 A efectos del artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

8.3 El Comité toma nota de los argumentos del Estado parte de que la comunicación debería declararse inadmisibile por incompatibilidad con las disposiciones del Pacto conforme al artículo 3 del Protocolo Facultativo, o bien por falta de fundamentación con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo. Al respecto, el Estado parte sostiene que la comunicación es inadmisibile *ratione materiae* ya que alega que se contravienen la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura. Sin embargo, el autor sostiene que el Comité tiene competencia para examinar dichas contravenciones en virtud de esos instrumentos. A título subsidiario, el autor aduce que sus reclamaciones deben considerarse como presunta conculcación de sus derechos en virtud del Pacto.

8.4 El Comité observa que las comunicaciones del autor son voluminosas y que pueden dificultar la tarea de determinar algunas de las reclamaciones concretas presentadas. Al respecto, la prudencia dicta identificar las reclamaciones del autor con el fin de considerar la cuestión de la admisibilidad. El Comité toma nota de que las reclamaciones del autor se refieren al período anterior a su expulsión del Canadá y a la expulsión en sí. Puede decirse que corresponden a seis categorías. En la primera, la reclamación del autor tiene que ver con el rechazo del Canadá a reconocerlos, a él y a su familia, como refugiados y a su posterior expulsión a Rumania, donde, según ellos, corren el peligro de volver a ser expulsados a la República de Moldova, donde es probable que sufran torturas. En la segunda, el autor sostiene que, junto a su mujer, les fueron negados sendos permisos de trabajo en el Canadá y, por lo tanto, se vieron obligados a vivir con un subsidio insuficiente que suponía pasar hambre y equivalía a tortura. El autor sostiene que la denegación de los permisos de trabajo y, por consiguiente, de acceso a oportunidades de empleo era discriminatoria, entre otras cosas, por motivos de inmigración y educación. En la tercera, el autor alega que su derecho a la libertad y a la seguridad personales fue violado cuando los agentes del Estado parte publicaron sus datos personales en un sitio web sin su consentimiento. En la cuarta, el autor alega que se han conculcado sus derechos a un recurso efectivo y al acceso a la justicia. En esta categoría, el autor alega que el requisito de pagar las costas judiciales y los gastos de solicitud les impidieron pedir justicia porque no podían pagar las costas judiciales. Alega, además, que el procedimiento judicial se vio afectado ya que los oficiales jurídicos asignados falsificaron las declaraciones juradas y, durante las audiencias, no se les permitió presentar pruebas cruciales que podrían haber afectado el resultado del procedimiento. En la quinta, el autor alega que el Estado parte se negó a facilitarle acceso, junto a su familia, a asistencia médica. Por último, el autor alega que, durante el proceso de expulsión del Estado parte, fueron detenidos, hostigados y obligados a pasar hambre. El autor afirma que fue agredido y que su hija fue objeto de amenazas de abusos sexuales.

8.5 El Comité señala que, en virtud del artículo 1 del Protocolo Facultativo, solo es competente para examinar comunicaciones que aleguen violaciones de los derechos establecidos en el Pacto. Por lo tanto, el Comité no es competente para examinar comunicaciones que aleguen violaciones de otros instrumentos. Sin embargo, el Comité observa que las reclamaciones del autor presentadas *supra* pueden suscitar también cuestiones en relación con los artículos 6, 7, 9, 14, 17 y 23 del Pacto.

8.6 En lo que respecta a la reclamación del autor de que su expulsión del Canadá a Rumania lo expondría, junto a su familia, a ser expulsado a su vez a la República de Moldova, donde en el pasado fue víctima de persecución y tortura por participar en actividades relacionadas con los derechos humanos y la lucha contra el comunismo, el Comité señala que el autor aduce que el artículo 24 de la Ley N° 302/2004 de Rumania sobre la cooperación judicial internacional en cuestiones penales permite que Rumania expulse a personas que tengan doble nacionalidad al país donde tengan la residencia permanente, en caso de que ese país haya solicitado su extradición para enjuiciarlas por acusaciones penales. El autor sostiene, además, que, a pesar de ser ciudadano rumano, esa nacionalidad no es efectiva, ya que ni él ni su familia han podido establecer su domicilio y este hecho hace, en efecto, que corran peligro de ser expulsados ya que, al parecer, solo pueden vivir legalmente en Rumania no más de tres meses. El Comité toma nota además de las observaciones del Estado parte de que el material presentado por el autor no demuestra, ni siquiera *prima facie*, que la consecuencia necesaria y previsible de la deportación sería su expulsión de Rumania a la República de Moldova, donde serían perseguidos.

8.7 El Comité recuerda que el autor de una comunicación debe, a los efectos de la admisibilidad, fundamentar suficientemente que ha sido víctima de una presunta violación del Pacto. El Comité observa que, para ser expulsados a la República de Moldova en virtud de las disposiciones del artículo 24 de la Ley N° 302/2004 de Rumania, debe existir una petición de extradición de la República de Moldova en que se indique que se busca al autor por motivos penales. El autor no ha demostrado que haya cargos penales contra él en la República de Moldova o que pueda haberlos. El Comité, por lo tanto, concluye que el autor no ha fundamentado, a efectos de la admisibilidad, que haya un riesgo real de que su familia y él vayan a ser expulsados de Rumania a la República de Moldova. Por lo tanto, esta reclamación es inadmisibile por falta de fundamentación en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

8.8 En lo que respecta a las reclamaciones restantes, el Comité recuerda su jurisprudencia en el sentido de que el autor debe presentar información suficiente para fundamentar sus reclamaciones y no limitarse a basar la comunicación en denuncias generales¹³. El Comité toma nota de que, en este caso, el autor presentó varias alegaciones de violación de sus derechos que podrían contemplarse dentro de los artículos 6, 7, 9, 14, 17 y 23 del Pacto. Sin embargo, el autor no presenta pruebas significativas para fundamentar sus reclamaciones de violación de esos derechos. En tales circunstancias, el Comité considera que el autor no ha fundamentado suficientemente, a efectos de la admisibilidad, que su familia y él hayan sido víctimas de presuntas violaciones de derechos en virtud del Pacto. Por lo tanto, la reclamación es inadmisibile en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

¹³ Comunicación N° 1638/2007, párr. 4.3.

9. Por lo tanto, el Comité de Derechos Humanos decide:
- a) Que la comunicación es inadmisibile en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo; y
 - b) Que la presente decisión se debe poner en conocimiento del Estado parte y del autor.

[Adoptada en español, francés e inglés, siendo la versión original el texto inglés. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]
